

# Informe de Eduardo Rojas al Tercer Pleno de la Dirección Nacional del MAPU

---

*28 al 30 de mayo de 1971*

Compañeros:

En el Informe al Pleno de enero, planteamos que "la elección de regidores debía ser puesta en la perspectiva de ganar para la UP y su Gobierno el apoyo mayoritario del pueblo". Decíamos también que debíamos aprovechar esa lucha para "ganar de una manera definitiva para las posiciones de la UP a aquellos sectores del proletariado y las capas medias que en septiembre se restaron a la victoria y que hoy se reencuentran con sus profundos intereses de clase como fruto de la acción consecuente del Gobierno Popular con su programa".

¡Una vez más la UP cumplió su tarea!

¡Hemos demostrado de nuevo que nadie se la puede contra el pueblo, cuando el pueblo unido está y unido combate!

¡Hemos demostrado que era verdad que somos los más y los mejores!

A partir del 4 de abril se manifiesta con rotunda claridad la nueva correlación de fuerzas que la acertada política del Gobierno de la UP había ido produciendo en apenas cinco meses de trabajo. En efecto, el cumplimiento vigoroso y consecuente de las medidas democráticas del programa – especialmente aquellas que tienden a un reparto más justo de la riqueza nacional– ha sido capaz de acercar a nuevas capas de nuestro pueblo.

Esto se ha expresado en el crecimiento electoral espectacular de los partidos que tienen mayor audiencia en la clase obrera, el PC y el PS, a cuyos candidatos apoyó en general el MAPU. Constatamos con alegría el peso cuantitativo creciente de los partidos obreros.

Sin embargo, al mismo tiempo, el deterioro relativo de los partidos llamados principalmente a movilizar a la mediana y pequeña burguesía ha revelado la debilidad del frente en la atracción de los sectores no monopólicos de la burguesía. Afirmamos que la tarea de completar la alianza, mediante la plena incorporación de estos sectores del pueblo, sigue siendo una tarea pendiente.

¡Ahora el pueblo se sabe mayoría!

La base de sustentación del Gobierno Popular se ha visto así robustecida. Pero más importante que eso es el hecho que hemos mostrado ante el país entero y ante el mundo que somos la mayoría absoluta de la población de este país. Y esto acrecienta de manera sustantiva la legitimidad democrática del Gobierno encabezado por el compañero Allende.

Si algo ha impedido que los enemigos del pueblo puedan tomar la iniciativa para reemplazar por la fuerza este Gobierno, además del profundo y decisivo arraigo que éste encuentra en las más vastas

masas de nuestro pueblo y de la fidelidad de las FF.AA. a sus tradiciones constitucionales y democráticas, es el hecho de que ha sido generado en forma impecable dentro de las reglas tradicionales del juego democrático burgués. En efecto, la inmensa mayoría de los que no votaron por la UP no está dispuesta a apoyar un Gobierno de facto, y los partidos de oposición no están todos ni enteramente por empujar ciegamente su oposición hasta el punto de interrumpir los cauces constitucionales. En otras palabras, la generación formalmente "burguesa" del Gobierno Popular neutraliza a importantes sectores burgueses o sometidos a su ideología y partidos.

Pero, antes del 4 de abril tenían todavía la posibilidad de decir que el 4 de septiembre los votos sumados de Alessandri y Tomic alcanzaban casi a los dos tercios del electorado, mientras los de Allende sobrepasaban escasamente un tercio clara y nítidamente minoritario.

Era esto una falacia porque la verdad es que el arrollador avance de la clase obrera y el pueblo en sus luchas había hecho su impacto en los sectores populares orientados por el PDC y lo había obligado a acentuar los aspectos reformistas del programa de su candidato. Esa suma, por tanto, no se hizo, no por un error de los estrategas de la burguesía, sino porque la agudización de la lucha de clases la hacía objetivamente imposible.

Pero hoy día, después del 4 de abril, incluso si les concedemos la suma de todas las fuerzas del PN, PDR y PDC, ignorando por un instante que en este último hay sectores del pueblo que han adquirido la mínima conciencia de clase suficiente como para impedirlo, así y todo, ellos son una minoría y no dejarán ya jamás de serio.

Después de dos meses de cavilaciones los momios han descubierto la forma de negar este hecho macizo. En efecto, la declaración de Partido Nacional de hoy, 28 de mayo, dice que como en la Unidad Popular hay también partidos "democráticos" éstos deben sumarse a los votos de la oposición. Textualmente dicen: "Sumados los votos obtenidos por los partidos marxistas –socialista y comunista–éstos siguen siendo una minoría en Chile". Si esto les sirve de consuelo que jueguen con la aritmética como quieran. El pueblo sabe qué terreno pisa: ¡se sabe mayoría y se comporta como tal!

La derecha de Onofre Jarpa y Julio Durán ha salido de esta elección con votaciones esmirriadas, muy inferiores a las votaciones abultadas que, a través de una manipulación habilidosa de la figura paternalista y autoritaria de Alessandri, fue capaz de acarrear hace apenas cinco meses.

El fracaso de la derecha freísta

Por su parte, la derecha de Eduardo Frei ha fracasado en su empeño por convertir al Partido Demócrata Cristiano en el partido eje de la oposición civil al Gobierno. Por el contrario, su conducción de la campaña de regidores ha acelerado y hecho más crítica la tendencia de ese partido a perder paulatinamente su influencia en sectores de nuestro pueblo. La votación que, mediante un inescrupuloso uso de trucos ya conocidos de la campaña del terror, logró arrancarle al alessandrismo no ha alcanzado a compensar las mermas enormes sufridas en un electorado popular que la candidatura de Tomic había logrado a duras penas mantener.

Este fracaso electoral de la derecha freísta ha abierto perspectivas al desarrollo de una influencia creciente de los sectores progresistas y democráticos del Partido Demócrata Cristiano, encabezados por la llamada "izquierda cristiana". Esto se ha manifestado con claridad en la reciente reunión de

Cartagena, donde más allá de los claroscuros de un texto esencialmente ambiguo y contradictorio como el de su resolución, el hecho es que la derecha freísta, con el peso de la cola entre las piernas, ha sido incapaz de hacer que el Partido Demócrata Cristiano persevere en su política, y de impedir que, a pesar de todo, una mínima apertura hacia las coincidencias programáticas con el Gobierno fuera impuesta por los sectores progresistas.

Esto no significa que el camino de la "izquierda cristiana" esté pavimentado. La derecha freísta conserva un inmenso poder de control sobre su partido, y tiene aún en sus reservas una cantidad de liderato y recursos que, llegado el momento, deberá emplear a fondo.

En la semana siguiente a la reunión de Cartagena, los senadores demócratacristianos, incluso algunos que se hacen contabilizar como progresistas, votaron en bloque con todo el momiaje, y aportaron 14 de los 19 votos con que se desafió a Codelia. Sólo el senador Ricardo Valenzuela fue capaz de denunciar de hecho, a través de su voto negativo, la actitud profundamente anti-popular de sus colegas.

Esta misma semana, el Tribunal de Disciplina del Partido Demócrata Cristiano, se ha ensañado contra el diputado Pedro Videla por no haber querido éste hacerse cómplice, por omisión, de la acusación del Partido Nacional contra el compañero Oyarce, Ministro del Trabajo. Se busca así escarmentar a todos aquellos que pretenden mostrar en los hechos caminos de convergencia con el Gobierno Popular.

Estos hechos, el caso Badila hace algunos meses, el proceso y la renuncia del periodista Hernán Rodríguez, y muchos otros, están indicando que la "izquierda cristiana" tiene por delante una lucha muy dura, pero absolutamente necesaria. Cuenta en su favor con la creciente madurez de nuestro pueblo que, incluso en sus sectores políticamente más atrasados, se resiste cada vez más a la criminal división del pueblo y a su utilización por sector de la burguesía.

#### Del populismo hacia el fascismo

Este mismo hecho explica que hoy día los esquemas populistas le sirvan menos que ayer a la burguesía. Tienden en cambio a fortalecerse en ésta las tendencias más conservadoras y autoritarias, capaces de representar de manera nítida y eficaz los intereses burgueses y de conducirla sin vacilaciones en período como éste, de acentuada polarización de la sociedad en torno a sus clases antagónicas. Así se entiende que el electorado de derecha confíe más hoy día en la conducción de los nacionales que en la de los demócratacristianos, y que dentro de los primeros se fortalezcan las figuras más representativas del fascismo.

Dicho de otro modo, el resultado del 4 de abril demuestra que la derecha no va a recuperar tan fácilmente sus posiciones a través de los mecanismos electorales. Esto, sumado a las dificultades objetivas que encuentra la ilusoria unidad de todos los partidos de oposición con que sueñan los Morales Adriazola, hace pensar que en la burguesía las alternativas golpistas, y en general antidemocráticas, tendrán cada vez mayor acogida.

Esto se refleja de alguna manera en los editoriales de "El Mercurio" del último tiempo, que ya no intentan colocar a Allende como garantía de la democracia, por encima de los partidos de la Unidad Popular y de su programa. Por el contrario, después del 21 de mayo, esos editoriales apuntan derechamente contra Allende y la perspectiva rotundamente socialista reafirmada en su Mensaje.

La enérgica protesta de la Sociedad de Fomento Fabril por la incorporación de las industrias textiles monopólicas al área de propiedad social, culminada en estos días, camina en el mismo sentido. Efectivamente, esa declaración pretende desconocer abiertamente la legalidad de lo obrado por el Gobierno y obligar a que cada una de las medidas del Programa sean materia de ley en el Parlamento, como si el Gobierno no tuviera ya en sus manos atribuciones constitucionales y legales suficientes que le permiten impedir el sabotaje y asegurar los niveles de producción necesarios.

¿Qué clase de tinterillos son éstos que pretenden desconocer las leyes que ellos mismos, con otras intenciones, hicieron en Parlamentos que les eran sumisos? ¡Se pisarán la huasca si pretenden enredar al pueblo y pasarle gato por liebre!

En los meses que vienen, debemos prepararnos para una ofensiva renovada de la reacción interna y externa, que se manifestará en todos los campos de la vida del país a medida que el Gobierno avance en el cumplimiento del Programa.

La nueva correlación de fuerzas justamente entrega a la Unidad Popular un macizo y creciente respaldo para profundizar en la aplicación de ese programa y, aunque el triunfo de abril en sí mismo no le ha servido para desalojar a la derecha de importantes posiciones de poder, abre paso –y esto es lo principal– a una situación en que es posible resolver positivamente la lucha por el poder en esta fase.

Necesidad de una línea táctica coherente

Es a partir de esta situación que la Unidad Popular debe elaborar su línea política, diseñar las tareas que es necesario realizar en esta etapa y movilizar a las masas tras su cumplimiento.

Esto hace necesario elaborar un plan político para enfrentar esta etapa de la lucha por el poder, donde se fijen los objetivos políticos concretos que nos permitan dar coherencia a las distintas tareas del Gobierno y de las masas en la perspectiva de la construcción del socialismo.

La ausencia de ese plan político impide utilizar eficientemente el Gobierno que es el arma fundamental que hoy día tiene el pueblo. A estas alturas del proceso no basta con la mera enunciación del programa de la Unidad Popular o las consideraciones teóricas generales sobre nuestra manera de entender la transición chilena al socialismo. Se hace indispensable señalar cuáles son los aspectos de ese programa que deben ser realizados ahora, cuáles son las tareas políticamente prioritarias y cuáles son las que deben subordinárseles. De otra manera la acción del Gobierno se transforma en la suma superpuesta de distintas iniciativas –todas justas consideradas individualmente– pero sin coherencia ni eficacia de conjunto.

Desde el punto de vista de la movilización de masas y de la lucha política, la ausencia de ese plan político dificulta enormemente la identificación de los enemigos que hoy debemos enfrentar, de los aliados que hay que atraer y de las tareas en torno a las cuales es necesario desarrollar el trabajo de agitación y movilización políticas.

En resumen, compañeros, queremos destacar con mucha fuerza que una de las limitaciones de la Unidad Popular que debemos resolver con la máxima urgencia es la de definir una concepción táctica que nos permita avanzar racionalmente a la conquista de los objetivos estratégicos del programa, o dicho de otro modo, que nos permita traducir el programa en un plan político capaz de orientar toda

nuestra acción, tanto desde el Gobierno como desde las masas. Ello supone instancias vigorosas de dirección colectiva en que todos los partidos aporten a la definición de una táctica común y resulten comprometidos con ella.

Hasta ahora no hemos encontrado el método que nos permita dirigir colectiva y eficazmente el Gobierno y las masas. Como Unidad Popular hemos hecho en varias oportunidades una justa autocrítica sobre esta deficiencia. El MAPU ha venido insistiendo reiteradamente sobre esta cuestión desde el Pleno de enero. Sin embargo, creemos que no se comprende bien todavía que muchos de los problemas que tenemos como Gobierno, que la mayoría de las conductas políticamente incorrectas que observamos en ciertos sectores del pueblo, incluso en la clase obrera, encuentran su explicación en la insuficiente capacidad de dirección de la Unidad Popular.

Nada ni nadie puede sustituir el papel de dirección de los partidos y del frente. Si no corregimos a la brevedad nuestros errores en este sentido en el futuro tendremos que enfrentar problemas aún mayores.

Las tendencias burocráticas

En efecto, una dirección política insuficiente es caldo de cultivo para el florecimiento espontáneo de tendencias negativas de derecha e "izquierda", que entran el proceso revolucionario.

En los aparatos del Gobierno, el "espontaneísmo", es decir, la ausencia de objetivos políticos de clase a los cuales subordinar las acciones administrativas, hace que muchos funcionarios se transformen en burócratas.

La legítima preocupación por dominar los secretos del servido, aumentar su eficiencia, revisar su reglamentación, financiar su presupuesto, adecuar su personal, va haciendo que la realización abierta de los objetivos programáticos se diluya en un mar de trámites, circulares, consultas, estudios y reuniones a puertas cerradas. No se ve cómo pueden en estos casos no aparecer las masas, sus dirigentes, sus aspiraciones, sus exigencias, como un obstáculo que entorpece el "buen funcionamiento" del Gobierno, en vez de aparecer como un punto de apoyo fundamental para incorporar nuevas energías, inteligencias y voluntades a la acción de los aparatos de Gobierno y a su transformación en instrumentos vivos al servicio del pueblo.

Pongamos un ejemplo: cuando el Gobierno Popular emprendió el cumplimiento de la tarea programática de estatizar la banca privada, se presentaron en la práctica errores increíbles que no fueron solucionados nunca a pesar de su indiscutible evidencia, tales como:

- locales de atención estrechos e inadecuados que se repletaban con 70 personas;
- funcionarios sin convicción alguna sobre la importancia de esa tarea;
- no se utilizó la gran propaganda que hubo, para anunciar a los interesados los documentos que necesitaban;
- no se tuvo Notario
- no se llevó control de las compras;
- no se designó funcionarios que aclararan dudas o consultas, etc.

Estos errores fueron observados por algunos, y se propusieron soluciones. ¡Cuánta falta hizo aquí la acción de los compañeros bancarios y su organización poniendo en vereda a los burócratas!

### El disfraz del legalismo

En nuestro país el burocratismo encuentra a menudo un disfraz adecuado en el legalismo. Contribuyen a ello las tradiciones legalistas que la dominación burguesa impuso en nuestra sociedad durante generaciones, pero mucho más que eso, la gestión del Gobierno de la Unidad Popular dentro de los marcos de la institucionalidad burguesa.

Es claro que esa institucionalidad juega hoy día, en general, a favor del pueblo y del Gobierno. Es, por esto mismo, evidente que no será la Unidad Popular quien la quiebre. Pero debe ser igualmente evidente que nuestro objetivo es sustituir el Estado burgués y no perpetuarlo; servirnos de él sin dejarnos atrapar por él.

A menudo estas concepciones legalistas contraponen la necesidad de mantener el Gobierno en el cauce institucional con la movilización de masas que otorga vida y fuerza real a ese mismo Gobierno. Es ésta una alternativa absolutamente falsa y dañina. Es precisamente lo que los enemigos de la Unidad Popular y del Gobierno quisieran: que en nombre del respeto a las instituciones del Estado se desmovilizara a las masas y se aislara el Gobierno. Si el desarrollo específico que la democracia burguesa ha tenido en Chile fue condicionado en gran medida por la lucha de vastos sectores del pueblo encabezados por la clase obrera, con mucha mayor razón la emergencia de instituciones más democráticas del Estado popular, será posible sólo en la medida en que las masas luchen y se movilicen decididamente tras el programa y las tareas que el Gobierno impulsa.

El caso del desafuero de Codelia constituye un buen ejemplo. Ha habido allí una extensa movilización de masas durante dos semanas. En una de estas jornadas las direcciones de algunos partidos de la Unidad Popular se restaron a la movilización. La verdad es que su actitud no fue entendida por la masa: pararon las fábricas y los campesinos se volcaron sobre Santiago. En todo caso, respetamos su criterio, pero no lo compartimos en absoluto. Creemos que la movilización en torno al compañero Codelia ha sido un verdadero ejemplo de cómo el pueblo debe defender a sus intendentes, a sus ministros y a su Presidente. ¡No puede haber situación más riesgosa para el Gobierno que la de andar solo y en descampado!

Algunos han pretendido que la manifestación frente al Senado ejercía una presión ilícita sobre un poder autónomo del Estado. Una cosa es respetar la autonomía del Senado, otra cosa es aceptar el chantaje de los senadores. Nos habría parecido un grave error disolver esa pacífica manifestación de campesinos mediante la fuerza pública, y así se lo hemos dicho formalmente al Ministro del Interior y al Presidente de la República.

La Unidad Popular debe entender el ejercicio del Gobierno de una manera radicalmente distinta a los partidos de la burguesía, aún cuando los marcos legales e institucionales sean los mismos.

El legalismo y el burocratismo son las principales desviaciones de derecha que se dan hoy en determinados sectores del Gobierno. Contra ellas debe desarrollarse una intensa lucha ideológica. Ellas contribuyen a alentar la desmovilización de las masas, a frenar el avance del programa y a facilitar la conciliación con los enemigos del pueblo.

El legalismo y el burocratismo, por otra parte, impiden que muchos sectores del pueblo - especialmente los más atrasados- comprendan cabalmente el carácter revolucionario del Gobierno y su diferencia fundamental con los gobiernos anteriores y favorecen el surgimiento de reacciones espontaneístas.

La falta de dirección política por parte de la Unidad Popular, a su vez, deja abierto el camino para el desarrollo de estas tendencias espontaneístas.

#### El espontaneísmo en las masas

En las masas más atrasadas, con menos conciencia de clase, con menos conciencia de los intereses profundos del conjunto de la clase, la lucha gira en torno de los intereses inmediatos y parciales de determinados grupos. Durante los largos períodos de formación y desarrollo del proletariado ésta es la vía normal a través de la cual acceden, sin contradicción, los diversos sectores de la clase a niveles superiores de conciencia y organización.

Es un proceso acumulativo por medio del cual la clase logra la progresiva integración de sus elementos, la total conciencia de sus intereses, la plena autonomía de su acción, hasta convertirse en clase revolucionaria.

Cuando la clase tiene el poder, o al menos una parte de él, la lucha por intereses parciales e inmediatos de determinados grupos entra a veces en contradicción con los intereses generales de la clase, que en esta circunstancia se expresan en la consolidación del poder político conquistado. Cuando esa contradicción existe, la lucha reivindicativa espontánea, lejos de ser una vía de integración al conjunto de la clase, es una forma de desintegración de la misma, de dispersión de sus objetivos, de debilitamiento de su fuerza.

En este sentido, es necesario combatir en el seno de las masas las herencias economicistas, que hoy día se tornan más dañinas que nunca, y que se expresan en la política del "tejo pasado", que tiene el efecto de consumir los excedentes de las empresas estatales que pertenecen a todo el pueblo y no solamente a quienes trabajan en ellas, o que tienen el efecto de empujar a la quiebra irremediable de capitalistas privados no monopolísticos que están llamados en esta etapa a ser parte de la alianza. La política del "tejo pasado" complota además abiertamente contra los programas antiinflacionarios del Gobierno haciendo que el reajuste privilegiado de algunos sea pagado por el pueblo consumidor en su conjunto a través de una alza de precios.

#### Las tomas

Las reivindicaciones espontáneas que entran en contradicción con los intereses generales de la clase suelen ir acompañadas, como formas primitivas de conciencia que son, de acciones también primitivas. Es el caso de muchas tomas anárquicas que reivindican la propiedad de tierras o de empresas que pertenecen a sectores de la mediana y pequeña burguesía, o incluso, a veces, de terrenos y viviendas asignados a sus propios compañeros de clase.

Pensamos que la toma, en principio, es una forma legítima de protesta. En el pasado ha sido un medio eficaz de llamar la atención hacia los problemas de determinados trabajadores y de expresar a través del dominio, no simbólico, sino material de la propiedad, un alto nivel de conciencia y de lucha.

La toma puede seguir teniendo vigencia hoy día en ciertos casos excepcionales, como formas de combatir focos de burocratismo, como en el caso de latifundios expropiados por la CORA hace muchos meses y de los cuales todavía no se toma posesión, o para evitar el sabotaje o el boicot, como ha sido el caso de las industrias textiles expropiadas en estos días.

Con todo, creemos que ésta no es la regla general. Ahora que la clase obrera está en el Gobierno se han abierto posibilidades de lucha infinitamente más eficaces, y en esa medida la toma aparece como una forma de protesta que más que contribuir a resolver los problemas de determinados trabajadores, crea pie forzados al Gobierno, lo obliga a alterar sus planes y prioridades, hace imposible una racional asignación de los recursos, y da pretextos a los patrones para dilatar los trámites administrativos y legales. Más aún, un conjunto de acciones de este tipo puede crear fácilmente un clima de desgobierno que, hábilmente explotado por la prensa reaccionaria, sirva los propósitos sediciosos y golpistas.

Creemos que los partidos de la clase, que tienen mayores responsabilidades en la orientación de las masas, debemos combatir con energía todas las desviaciones espontaneístas, economicistas, anárquicas, etc.

Nuestro partido no debe temer jamás no ser comprendido por algunos compañeros. Nosotros no construimos el partido sobre la base de halagar las aspiraciones inmediatas de la masa. Ese no es un partido de clase, sería un partido populista. Nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar de cara a las masas estas contradicciones, y de hacer con ellas un trabajo paciente que signifique elevar la conciencia y la calidad de sus luchas.

La lucha ideológica contra el "izquierdismo"

Hay grupos políticos revolucionarios, de extracción fundamentalmente pequeño-burguesa, que hacen del espontaneísmo su caldo de cultivo, y que procuran a todo trance capitalizarlo. La lucha contra el burocratismo y el legalismo es a veces esgrimida como el pretexto de sus acciones. Sin perjuicio de que en muchos casos pueda eso justificarlas, pensamos que la lucha contra esas desviaciones debe ayudar a fortalecer el Gobierno y no a debilitarlo. La verdad es que en el balance político de los focos de agitación de estos grupos, el Gobierno no sale precisamente fortalecido.

En estos días, la toma por grupos armados de un fundo de la comuna de El Monte, ha provocado una polémica pública entre el MIR y personeros responsables del Gobierno que ilustra bien este problema.

Nosotros creemos que aquí no hay por dónde perderse. No estamos por crear expectativas demagógicas sobre tierras que tanto por su cabida como por su mala calidad no resuelven los problemas de los campesinos. No estamos por impedir físicamente el diálogo entre los trabajadores en conflicto y las autoridades de Gobierno, como en este caso sucedió. No estamos por realizar la Reforma Agraria sobre las bases de tomas aisladas y anárquicas que entorpecen y dificultan su desarrollo planificado y eficiente.

Todo lo anterior nos da justamente mayor autoridad para afirmar que las contradicciones en el seno del pueblo no se resuelven verdaderamente sino a través de la discusión, de la persuasión, de la educación y, en general, de los métodos que ponen en juego la conciencia antes que la fuerza.

Compartimos las palabras del Presidente Allende hace unos días, cuando en su conferencia habitual a los corresponsales extranjeros declaraba: "Yo puedo respetar las convicciones revolucionarias de los integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario, pero no puedo aceptar sus tácticas y sus métodos. ¿Por qué los usan precisamente ahora que hay un Gobierno Popular? ¿Por qué no los usaron antes? ¡Los usan ahora porque saben que tenemos las manos atadas, no por la tolerancia, sino por la convicción! Actuar en la impunidad es muy fácil".

Las actividades de grupos políticos como éstos muestra que estaba en lo cierto nuestra dirección cuando en el Pleno de enero decía que aún en las condiciones del Gobierno Popular "subsisten diferencias respecto de muchos de ellos, la más importante de las cuales es, a nuestro juicio, la incomprensión del carácter de la alianza y del programa de la Unidad Popular, que los lleva a no entender el papel que la mediana y pequeña burguesía tienen en esta etapa del proceso.

"Las actitudes políticas que derivan de esta incomprensión entorpecen el cumplimiento del programa, debilita el enfrentamiento con los enemigos fundamentales y tienden a aislar a la Unidad Popular de sectores que objetivamente deben ser aliados".

Seguimos pensando que el Gobierno Popular ha creado condiciones para el entendimiento de la Unidad Popular con estos grupos, pero hoy día igual que en enero, creemos que esos entendimientos no deben "excluir la necesaria lucha ideológica frente a las masas". No nos hacemos la ilusión de llegar mañana o pasado a acuerdos totales y permanentes. Creemos que en ellos, debe todavía completarse un proceso de verdadera autocrítica, para el cual, la lucha ideológica debe ser un aliciente irremplazable.

Sostenemos que en la medida en que logremos fijar claramente ante las masas y los partidos los objetivos tácticos de esta etapa, y las acciones necesarias para alcanzarlos, el Gobierno, las organizaciones de masas y la Unidad Popular adquirirán una extraordinaria cohesión, y el proceso revolucionario ganará enormemente en profundidad, en coherencia, en disciplina y en eficacia. En ese contexto las desviaciones de derecha e "izquierda" tenderán a minimizarse, y serán corregidas por la fuerza misma de los hechos.

Como una contribución a esa elaboración táctica, nuestro partido desea plantear las tareas que, a su juicio, deben caracterizar la fase de lucha abierta por la elección del 4 de abril.

Estas tareas son:

- la lucha por el poder político y la construcción del Estado Popular;
- la destrucción de las bases del poder de los enemigos principales y la construcción de la nueva economía;
- la consolidación y ampliación de la alianza de clases que sustenta todo este proceso.

La lucha por el poder político y la construcción del Estado Popular

Después de la elección de abril, la Unidad Popular está en condiciones de dar una nueva batalla por la conquista del poder político. Existe una nueva correlación, favorable a la Unidad Popular, que hoy se expresa solamente en el control de los puestos de comando político del Gobierno, pero no en la totalidad de los poderes del Estado, principalmente el Congreso. Si no se altera la composición del

poder en los diversos aparatos del Estado, la construcción del Estado Popular será prácticamente imposible.

La fuerza de la Unidad Popular y del Gobierno permite que la transformación del Estado se realice sin quebrar el marco constitucional vigente, es decir, utilizando los mecanismos que establece la propia democracia burguesa.

La Unidad Popular tiene varias alternativas para enfrentar las transformaciones en el aparato del Estado.

Algunos plantean la necesidad de promover una reforma constitucional que contenga las proposiciones fundamentales del programa de la Unidad Popular en esta materia y que de modo principal constituya la Asamblea del Pueblo como órgano superior del Estado.

Creemos, en todo caso, que la etapa que estratégicamente está definida en el programa, no tiene un carácter plenamente socialista, sino de preparación de las bases materiales y políticas del socialismo. Por eso en ella, junto a tareas como las que, por la vía de la expropiación, van configurando el área de propiedad social en la economía, hay tareas que dicen relación con la liberación nacional y con la ampliación de los derechos democráticos. Por eso también en ella, junto al proletariado, tienen un papel que cumplir las capas burguesas no monopolíticas. En efecto, el programa no pretende terminar con la pequeña y mediana propiedad capitalista aunque ella es fuente de una ilegítima apropiación de trabajo ajeno, sino concentrar sus fuegos en la propiedad capitalista latifundista, monopolítica e imperialista. Por eso, el Estado que corresponde a esta etapa no es un Estado socialista o de trabajadores, sino un Estado Popular con dirección proletaria, como claramente lo establece el Programa básico. La nueva constitución que necesitamos no es por tanto una constitución socialista, sino una constitución democrática y popular, que abra paso a la construcción socialista.

No debe pensarse tampoco que la mera reforma constitucional asegura automáticamente la existencia del Estado Popular. Una reforma constitucional expresa una nueva situación de poder y abre las puertas para un cúmulo de experiencias de las masas, experiencias que sólo cuando han adquirido suficiente desarrollo pueden consolidarse y traducirse en un nuevo y completo ordenamiento institucional. Antes de eso, los mecanismos que pudieran diseñarse tendrían necesariamente un carácter excesivamente formal.

Nosotros pensamos que no es éste el momento para impulsar una transformación de esta naturaleza. El carácter regresivo del sistema institucional vigente no es aún suficientemente percibido por las masas. Una reforma constitucional concebida así, aparecería como un objetivo desligado de sus necesidades concretas más urgentes y sentidas, y por tanto sería un objetivo político que difícilmente las movilizaría.

Un Parlamento unicameral para la mayoría

Nos inclinamos por un objetivo más concreto: obtener la Cámara Única y ganar su mayoría para la Unidad Popular. El control del Parlamento es importante para avanzar en el cumplimiento del programa y para impedir que la derecha lo utilice para dar una cobertura legal a sus maniobras contra el Gobierno.

El cambio del actual Parlamento bicameral por una sola Cámara, constituye una aspiración muy sentida por las masas, en la medida en que el carácter intrincado de sus procedimientos ha retardado la obtención oportuna de reivindicaciones absolutamente justas e impostergables. No hace mucho tiempo, por ejemplo, que los reajustes salariales se aprobaban con tres, cuatro o más meses de retraso.

Nadie podría hoy justificar esa absurda división del poder parlamentario que tiene sus orígenes en las disputas que en algunos países europeos libraba la burguesía con la nobleza feudal, hace algunos siglos, y mediante la cual esta última pretendía reservarse una cámara para nobles, privilegiada en relación a la cámara de la burguesía o de los "comunes".

Queremos un Parlamento unificado, moderno, eficiente, que responda total y directamente a la voluntad del pueblo, un Parlamento democrático y popular.

La renovación normal del Poder Legislativo debe realizarse en marzo de 1973, pero la actual correlación de fuerzas permite adelantar esa fecha y la batalla por el Parlamento en marzo o abril de 1972, en mejores condiciones para el pueblo y la Unidad Popular.

El mecanismo para lograrlo es una reforma constitucional que cambie la estructura actual del Parlamento, estableciendo la Cámara Única, y facultando al Presidente de la República para disolverla por una sola vez durante su mandato. El planteamiento de dicha reforma por parte de la Unidad Popular llevará probablemente a un enfrentamiento plebiscitario.

Creemos que existen hoy día y en el futuro inmediato las condiciones para obtener un triunfo en el plebiscito y en la elección parlamentaria que le seguiría si la Unidad Popular lo plantea como una de las tareas centrales de este año, si se logra que la reforma constitucional y el plebiscito se ligen al cumplimiento del programa de Gobierno y a la necesidad de que el Parlamento, junto con tener una estructura más racional, expedita y moderna, refleje realmente los intereses de la mayoría del país.

Planteadas así las cosas, el plebiscito se convierte en una instancia de movilización y de lucha política de extraordinaria importancia y el triunfo en él de la Unidad Popular significa un avance decisivo en la lucha por el poder.

La obtención de la mayoría en el Congreso permitiría encarar, en condiciones aún mejores para el pueblo y la Unidad Popular, el problema de la transformación del Estado burgués en Estado popular.

Avanzar en la transformación del Estado

El hecho de que no se plantee como un objetivo inmediato la transformación jurídica del Estado no significa que ya desde ahora, y aún antes de ninguna reforma constitucional, no se inicie en la práctica la transformación de clase del aparato de gobierno mediante la incorporación de las masas a sus instancias principales.

Una de las limitaciones más importantes que ha tenido nuestra acción en el Gobierno ha sido la lentitud para crear mecanismos de participación de las masas en la conducción del Gobierno. El Mensaje al Congreso del Presidente Allende señala esta limitación con mucha claridad: "hemos marchado lentamente en configurar los mecanismos sociales de participación popular". Afirmamos que no es posible movilizar activamente a las masas tras el cumplimiento de los objetivos del

programa si no se las incorpora a la conducción del Gobierno, si no se les transfiere de una manera progresiva, pero real, el ejercicio del poder.

Es necesario poner en práctica el proyecto sobre la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del área de propiedad social e institucionalizar su incorporación a la gestión económica y social del Gobierno en todos los niveles.

Asimismo, pensamos que debe estudiarse un proyecto de ley sobre los Consejos Campesinos que defina con mayor precisión sus atribuciones y organización, y dé facilidades para su funcionamiento, otorgándoles un financiamiento mínimo y fuero a los dirigentes campesinos que los componen.

La incorporación de las organizaciones vecinales en la dirección de los programas destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, barrios y ciudades en materias como salud, vivienda, urbanización, etc., debe ser también fuertemente impulsada.

En fin, durante los próximos meses, la incorporación efectiva del pueblo al ejercicio del poder será el único instrumento de fusión de las masas con su Gobierno, el único que otorgue contenido real a la transformación revolucionaria del Estado.

El papel de las Fuerzas Armadas

Vinculada a la transformación del Estado que nos proponemos realizar está la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas.

Sostenemos de entrada que éstas están llamadas a jugar un papel positivo en el proceso de desarrollo de nuestra independencia nacional, de perfeccionamiento de nuestra democracia y de construcción del socialismo en nuestra patria.

En nuestro Pleno de enero, decíamos:

"Las Fuerzas Armadas (...) sólidamente asentadas en tradiciones constitucionalistas, profesionales y de progreso, comprenden que en esta etapa, igual que en todas las grandes etapas de nuestra historia, el acrecentamiento de nuestra soberanía es la obra de todo el pueblo, plenamente movilizado.

"El desarrollo de las tareas de liberación nacional acercará ineluctablemente al pueblo y a sus Fuerzas Armadas, y fundidos en el hacer patria, se convertirán en un muro infranqueable para los enemigos de Chile, por poderosos que sean los aliados y los recursos que éstos comprometan".

Hoy día podemos comprobar en los hechos, que se ha producido un acercamiento real entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. El pueblo sabe que no hay en este Gobierno, que es el suyo, la intención de emplear los dispositivos armados, ni siquiera los policiales, en tareas de represión anti-popular. Y las Fuerzas Armadas saben que este Gobierno no las utilizará para menesteres policiales que las enfrentan al pueblo.

Creemos que en esta materia cualquier analogía simplista con el papel que en otros procesos revolucionarios jugaron otras fuerzas armadas puede conducir a conclusiones equivocadas. Igualmente, un análisis teórico esquemático sobre el papel del Estado y sus aparatos armados en las

sociedades clasistas a través de la historia puede llevar a enfoque dogmáticos, que ligen de manera mecanicista las clases dominantes a sus instrumentos institucionales de dominación.

Las analogías y las teorías nos son útiles en la medida en que nos ayudan a explicar los hechos. Y el hecho fundamental es que nuestras Fuerzas Armadas han mostrado en la práctica una consecuencia impecable con la letra y el espíritu de sus tradiciones ahora que la burguesía, tanto tiempo dominante, ha sido definitivamente desalojada del Gobierno y una patriótica alianza del pueblo ocupa su lugar.

Esa tradición, profundamente democrática, arraigada firmemente en los mandos y tropa de nuestras instituciones armadas, precisada con brillo por el comandante Schneider y sellada con su sangre, constituye la más sólida garantía de unidad entre pueblo y Fuerzas Armadas.

Esto no significa que no existan nuevos problemas teóricos y prácticos que es necesario abordar sin prejuicios y resolver correctamente. Lo importante, sin embargo, es constatar que aquellos que, dentro de las filas del Ejército, se han colocado al margen de esa tradición y han pretendido desvirtuarla para mezquinos intereses, han sido puestos en su lugar por las mismas instituciones a que pertenecían y son hoy día procesados por la justicia militar.

Constatamos también que en este tiempo los llamados del compañero Allende a las Fuerzas Armadas para que éstas entreguen su aporte de inteligencia y voluntad a las grandes tareas de desarrollo de nuestra independencia económica 'han sido correspondidos responsable y eficientemente por éstas. En efecto, destacados oficiales asumen crecientes responsabilidades en las grandes industrias nacionales que contribuyen a independizar del extranjero el abastecimiento militar básico y a desarrollar nuestro potencial económico.

Con todo, sabemos que esa no es la única tarea de nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos que ellas tienen además la misión de garantizar el respeto y la defensa del gobierno constitucionalmente elegido, que expresa la voluntad democrática de nuestro pueblo. Pero sabemos, sobre todo, que la tarea esencial es y será siempre la de defender la soberanía y velar por la seguridad de la nación.

Supuestos de nuestra seguridad han cambiado

Compartimos íntimamente el espíritu del Programa básico de la Unidad Popular cuando plantea que la preservación de la soberanía es "un deber de todo el pueblo". Nos preocupa, pues, como partido del pueblo que somos, la defensa de la soberanía nacional, y nos sentimos responsables, además, como partido de Gobierno, de las cuestiones relativas a la seguridad nacional.

Pues bien, la concepción de la seguridad nacional mientras el país estuvo gobernado por clases y partidos que no cuestionaban nuestra dependencia del imperialismo tiene hoy día que ser revisado, cuando el pueblo inicia un proceso de definitiva independencia nacional. Las amenazas sobre nuestra soberanía son hoy distintas en su calidad y procedencia. Los supuestos políticos, geográficos y técnicos en que debe basarse nuestra seguridad nacional han cambiado.

Esto exige una discusión sobre el carácter que hoy día debe tener nuestra política de defensa nacional, una preocupación responsable por el presupuesto y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, y una particular atención a los requerimientos técnicos y científicos que exige su moderno desarrollo profesional.

El pueblo de Chile tiene, en todo caso, depositada su confianza en la capacidad de sus Fuerzas Armadas para responder a los nuevos desafíos que esta etapa histórica plantea.

#### Las bases de la nueva economía

En estos meses el Gobierno y la Unidad Popular han diseñado con claridad la política de enfrentamiento con el imperialismo y el latifundio. Esto se expresa en la nacionalización del cobre, el hierro y hoy día mismo el salitre, y en la expropiación de 1.155 fundas antes de julio de este año. Si bien es cierto que en el desarrollo de ambos programas existen diversos problemas que es necesario abordar, desde el punto de vista político la lucha contra el latifundio y por la recuperación del cobre y nuestras riquezas básicas ha sido nítidamente proyectada.

No ha ocurrido lo mismo en el enfrentamiento con la burguesía monopólica. A pesar de que en estos meses se han incorporado al área de propiedad social un número importante de empresas, algunas de gran significado estratégico (como es el caso de las industrias del cemento, el carbón, la siderurgia y otras), hasta hace pocos días el proceso de expropiaciones ha tenido un carácter inorgánico e insuficientemente explicitado.

No obstante, se ha logrado durante este proceso adquirir una valiosa experiencia en el conocimiento directo de las características del sector monopólico de la economía chilena, en la utilización de recursos legales, administrativos, técnicos y operacionales de que dispone el Estado para hacer frente a esta tarea y en la detección de los principales problemas que es preciso resolver para hacer del área estatal el germen del sector socialista de nuestra economía. Este conjunto de experiencias y la nueva situación política hacen posible desarrollar ahora una gran batalla política contra la burguesía monopólica, orientada al doble objetivo de destruir las bases materiales de su poder y acelerar la constitución del sector estatal y socialista de la economía. Para ello es necesario avanzar rápida y decisivamente en la expropiación de algunos monopolios básicos y resolver los problemas de organización de las empresas estatales como un sector de orientación socialista.

Saludamos con entusiasmo la expropiación de los monopolios de la rama textil anunciada el lunes de esta semana. Nuestros compañeros que tienen responsabilidades de Gobierno en el sector económico tuvieron destacada participación en esta iniciativa y la Comisión Política los apoyó decididamente.

La expropiación de los monopolios textiles marca una nueva etapa en la política anti-monopólica del Gobierno. El anuncio simultáneo de la expropiación del resto de las empresas de la rama textil que constituirán el área de propiedad social, la fundamentación de esta medida en el cumplimiento del programa y la participación activa de los trabajadores textiles en la operación, son los rasgos principales de esta nueva política.

Una vez definida el área de propiedad social en la rama textil, se hace necesario e indispensable definirla en las otras ramas de la economía y programar el desarrollo de las expropiaciones.

#### La ampliación del área de propiedad social

Los criterios generales para definir el plan de expropiaciones son los que están contenidos, muy precisamente, en el Programa de Gobierno que la Unidad Popular presentó al país. El MAPU ha propuesto para este año como objetivos fundamentales lograr el control por el Estado de los

monopolios productores de medios de producción e insumos básicos de los sectores vinculados al comercio exterior y de aquellos que tienen una influencia decisiva en el abastecimiento de la población. Al mismo tiempo, se da así cumplimiento al objetivo de destruir el poder de los clanes monopólicos que encabezan la obstrucción a los programas del Gobierno Popular o alientan la sedición fascista.

En base a estos criterios pensamos que deben expropiarse a la brevedad los monopolios ligados a la industria metalúrgica y metal-mecánica, de insumos de la construcción (asbesto-cemento, vidrio y otros), de la industria alimenticia (azúcar, aceite, fideos, lácteos, pesqueras, tabaco, etc.), del papel y de la celulosa y de artefactos para el hogar.

Desarrollar rápida y decididamente este programa significa poner en manos del pueblo de Chile los resortes básicos de la economía y del desarrollo del país, el cemento necesario para construir las miles de casas que el pueblo necesita, los alimentos urgentes para la mesa de cada familia del pueblo, el papel para desarrollar la educación y la cultura, el acero para levantar la industria nacional. Significa liberar la enorme energía de trabajo, esfuerzo e inteligencia de los obreros, empleados y técnicos de los principales centros industriales y ponerlos al servicio de la creación de la patria nueva.

La organización de la economía socializada

Junto con proponer la ampliación del área de propiedad social debemos enfrentar los problemas de su organización.

Muchos se preguntan acerca del carácter del área estatal que estamos creando. Temen algunos que la Unidad Popular esté solamente aumentando el número de empresas que hoy controla el Estado, reforzando el capitalismo de Estado que la burguesía chilena comenzó a desarrollar a partir de la década del cuarenta.

La Democracia Cristiana, por su parte, pretende "emborrachar la perdiz", planteando un falso y confuso antagonismo entre el socialismo "estatista" y el socialismo "comunitario". Pretenden crear la imagen de que la Unidad Popular plantea una organización del área estatal donde los trabajadores no tendrán ninguna participación, donde las empresas estarán dirigidas burocráticamente por un administrador del Estado y donde, en fin, se aplastará toda iniciativa personal y colectiva. La alternativa demagógica que algunos levantan es la de entregar la dirección total de las empresas a sus trabajadores.

O estos señores no entienden bien de qué se trata, o bien están haciendo demagogia pura. Porque a nadie se le puede ocurrir que la participación de los trabajadores en la conducción de las empresas estatales signifique, por ejemplo, entregar la dirección de la gran minería del cobre exclusivamente a sus trabajadores o de los bancos exclusivamente a los trabajadores bancarios.

A nadie escapa que la importancia de esas empresas, como la de todos los monopolios que integrarán el área de propiedad social, exige que en su dirección participen todos los trabajadores del país y que el conjunto del pueblo, a través de su Estado, tenga un rol decisivo en la planificación de su desarrollo.

Lo mismo ocurre con los excedentes que esas empresas generen. Una parte de ellos, en algunos casos la mayor, debe constituir patrimonio de todo el pueblo. Afirmar lo contrario, es promover una estratificación de injustos y arbitrarios privilegios en el seno de los trabajadores.

La visión de la organización socialista de la economía que procuran proyectar es radicalmente falsa. Sólo el socialismo es capaz de lograr la participación creadora, responsable y permanente de los trabajadores en la dirección de cada empresa y de la economía en su conjunto, a la vez que garantiza que sea el Estado -un Estado del que los trabajadores no son ajenos sino parte- quien asegure a través de la planificación el funcionamiento armónico de la economía al servicio de los intereses del conjunto del pueblo, y no de grupos particulares. Desconocer este hecho central es desconocer de hecho las ventajas del socialismo como forma de organización económica. El planteamiento de la Democracia Cristiana, aunque se escude en el rótulo de "socialismo comunitario", no será más que una manera, un tanto sofisticada, de defender formas capitalistas de producción mientras no reconozca el papel que en él debe jugar el Estado de trabajadores y la propiedad del pueblo a través de ese Estado.

#### Hacia la planificación socialista

Para avanzar en la construcción del área de propiedad social como un sector socialista dominante de la economía chilena se hace necesario resolver adecuadamente algunos problemas.

El primero es el de la organización de las empresas estatales como un todo, a través de su integración por ramas de la producción en los comités sectoriales de cada rama, instancias intermedias de planificación, evaluación y control, que podrán ir asumiendo progresivamente funciones de financiamiento, investigación, comercialización y otras que desbordan el marco de cada empresa.

Hasta ahora hemos avanzado en la creación de siete comités sectoriales en algunas ramas de la producción (insumos de la construcción, papel y celulosa, etc.). Se hace indispensable afinar la estructura, las atribuciones y el funcionamiento de dichos comités, asegurando la participación en ellos de los trabajadores de las ramas a través de las federaciones respectivas y de la CUT.

La propiedad social, junto con terminar con las clases, permite que el conjunto de los medios de producción sean manejados como una unidad, sin las vallas y parcelaciones que establecía la propiedad privada sobre ellos. Es eso lo que permite la planificación socialista y el desarrollo racional y óptimo de las fuerzas productivas.

Por eso no podemos aceptar que en el área estatal se vayan configurando feudos independientes unos de otros. Tenemos que preocuparnos por desarrollar los órganos de dirección centralizada de la economía.

Observamos con preocupación la tendencia de algunos ejecutivos de empresas del Estado, felizmente muy pocos, a concebir la estatización como el mero cambio de gerentes privados por gerentes estatales, sin producir alteraciones en las relaciones de producción y sin vincular las empresas a los organismos de planificación y control que se han ido generando en estos meses. En definitiva, estos compañeros tienden a crear pequeños "imperios" industriales, que se manejan independientemente, que se relacionan con otras empresas del Estado en términos de competencia y que frenan la participación de los trabajadores en la conducción de ellas. Estas concepciones no

tienen nada que ver con las de la Unidad Popular, y con estos compañeros que se las dan de "gerentes" de nuevo cuño hay que librar una aguda lucha ideológica. Y si no entienden... bien, ¡que se vayan a "gerentear" a otra parte!

El Presidente Allende ha fijado claramente la posición del Gobierno a este respecto en su Mensaje al Congreso Pleno. "El establecimiento del área de propiedad social no significa crear un capitalismo de Estado sino el verdadero comienzo de una estructura socialista. El área de propiedad social será dirigida conjuntamente por los trabajadores y los representantes del Estado, nexo de unión entre cada empresa y el conjunto de la economía nacional. No serán empresas burocráticas e ineficaces sino unidades altamente productivas que encabezarán el desarrollo del país y conferirán una nueva dimensión a las relaciones laborales".

La participación de los trabajadores

Muy vinculado al problema anterior está el de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del Estado. Hemos participado activamente en la respectiva comisión CUT-Gobierno.

Los aportes del MAPU en la elaboración del proyecto de esa comisión se han orientado a garantizar la más plena participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del Estado sin ningún tipo de limitaciones y a asegurar una dirección operativa con la suficiente autoridad como para permitir un funcionamiento eficiente de la empresa.

Al mismo tiempo, hemos subrayado la necesidad de robustecer desde el comienzo el papel autónomo de la organización sindical respecto de la administración de las empresas. A nuestro juicio, el sindicato debe desarrollar una activa función de vigilancia sobre el aparato de dirección y de movilización de los trabajadores en torno a las nuevas tareas que enfrenta la clase obrera.

De acuerdo a estos criterios hemos insistido, entre otras cosas, en la necesidad de establecer el principio de que corresponde al Estado el nombramiento del administrador, y a las autoridades de la empresa la generación de las jerarquías inferiores. Pero, al mismo tiempo, nos ha parecido importante asegurar que el administrador cuente desde el comienzo con la confianza de los trabajadores. Por eso el MAPU ha propuesto que la Asamblea de trabajadores tenga derecho a veto sobre la designación del administrador de la empresa cuando sus dos tercios así lo acuerden, y que una vez al año –con oportunidad de una cuenta anual sobre la marcha de la empresa a la Asamblea– ésta pueda censurar la gestión del responsable y aprobar su remoción.

También, hemos insistido en la necesidad de fijar el plazo de un año para que se constituyan los sindicatos únicos en cada empresa, cuestión fundamental para asegurar adecuadamente la participación de todos los trabajadores –obreros, empleados y técnicos– en la dirección. Sin embargo, donde hoy todavía no existen tales sindicatos, ello no deberá constituir un obstáculo para implantar inmediatamente las estructuras de participación, creando instancias de coordinación entre todos los sindicatos actualmente existentes.

En segundo lugar, respecto del área mixta, pensamos que la participación de los trabajadores allí debe tender a asegurarles el acceso a la información de la empresa, así como a facilitar su labor de vigilancia. En el caso de que el Estado tenga la mínima representación necesaria para el control de la empresa (51%) somos partidarios de que se entregue con plenos derechos a los trabajadores los

cargos que excedan ese mínimo. Cuando el Estado no tenga ese mínimo, pensamos que los trabajadores deben tener dos representantes con derecho a voz en el directorio.

Por último y respecto de las empresas privadas, creemos necesario reafirmar los criterios enunciados en los Plenos de enero y febrero, en orden a reconocer aquí el papel que debe jugar la clase y sus organizaciones respecto del control y vigilancia de la producción. Para ello entregamos oportunamente, al realizarse la Novena Conferencia de la Central Única, hace 3 meses en Valparaíso, nuestra proposición de estimular la formación de comités de vigilancia en las empresas privadas, que tuvieran funciones tales como vigilar la plena utilización de la capacidad instalada, detectar boicots y sabotajes, controlar y fiscalizar la fijación de precios, costos y utilidades, etc. Saludamos con entusiasmo la iniciativa recientemente lanzada por la Central Única respecto de la formación de los comités de vigilancia de la producción, única forma de que la clase obrera y los trabajadores en general garanticen con su acción el éxito de la batalla de la producción en que se encuentra empeñado el pueblo y su Gobierno.

La producción: tarea de todo el pueblo

Las empresas industriales del área de propiedad social, las grandes minas del cobre, del hierro, del salitre y del carbón nacionalizadas, y el área reformada de la agricultura constituyen los pilares fundamentales para la elevación de la producción y de la productividad, aspecto de primera importancia para el éxito de nuestra política este año. Corresponde a los trabajadores de esas empresas el papel de vanguardia en la construcción económica, en particular en la tarea de aumentar los niveles de producción ahora.

Constituye un error, sin embargo, creer que son sólo los trabajadores del área estatal los llamados a aumentar la producción. Hemos dicho ya que ese objetivo concierne hoy día a la clase obrera en conjunto, incluso a aquellos sectores obreros que trabajan en el área de propiedad privada y que a través de los comités de vigilancia en cada empresa deben asegurar la producción. La vigilancia de la producción así como la lucha por condiciones salariales y de trabajo justas son las principales tareas del proletariado de la empresa privada en esta etapa.

Los principales esfuerzos por elevar la producción deben concentrarse en la gran minería del cobre, en la producción industrial vinculada a la construcción y en el sector agropecuario.

La consolidación y ampliación de la alianza

Los éxitos obtenidos por la Unidad Popular se deben en buena medida a una correcta apreciación de las clases que el proletariado es capaz de nuclear en torno a sí para enfrentar a los enemigos fundamentales: el imperialismo, la burguesía monopólica y el latifundio.

A pesar de lo mucho que se ha avanzado, la alianza y la Unidad Popular no han incorporado aún a todos los sectores que política y socialmente deben integrarla. A su vez, el apoyo de sectores populares atrasados no está todavía suficientemente consolidado.

En términos de ampliar y consolidar la alianza se plantean dos objetivos importantes: operar una política de atracción de la burguesía media y pequeña, y mantener el efecto de las medidas democráticas. Hay un tercer problema que está ligado al desarrollo de la alianza, y que tiene una

importancia política coyuntural decisiva: el de las relaciones de la Unidad Popular y el Gobierno con la Democracia Cristiana.

#### La burguesía mediana y pequeña

Si bien el resultado electoral de abril demostró un crecimiento sustancial de la Unidad Popular, es indudable que aún no se expresan plenamente en ella las clases cuyos intereses están representados en su programa. Esto es particularmente válido para las fracciones de la burguesía mediana y pequeña que están llamadas a integrar la alianza y para sectores de la pequeña burguesía.

La falta de integración de estos sectores a la alianza se debe a varios factores. En primer lugar, al hecho de que aún no visualizan con suficiente claridad y seguridad que sus intereses como clase coinciden con los del proletariado, y son opuestos a los de la gran burguesía monopólica que los ha explotado desde siempre. En segundo lugar, a que la política del Gobierno no ha sido totalmente coherente con los intereses de estos sectores y no ha ayudado siempre a esta comprensión. Por último, a que las posiciones ultraizquierdistas que se manifiestan dentro y fuera de la Unidad Popular tienden a distanciar a esos sectores del Gobierno.

El esfuerzo por ampliar el frente sigue siendo, entonces, una tarea política importante. La nacionalización de la banca y de los monopolios, junto a una correcta política de alianzas, permitirán estimular el desarrollo de la pequeña y mediana empresa por la vía del crédito, del abastecimiento de materias primas y de las órdenes de compra, creando así las bases objetivas para el acercamiento de estos sectores de la burguesía a la Unidad Popular y al Gobierno.

La organización de los pequeños y medianos empresarios por ramas industriales proporcionará un canal expedito para la implementación de la política de estímulo a la mediana y pequeña empresa que el Gobierno persigue desarrollar a partir del control estatal de los monopolios básicos de cada rama.

#### Mantener y ampliar las medidas democráticas

Las medidas democráticas contempladas en el Programa de la Unidad Popular constituyen la base del apoyo popular al Gobierno. En la medida en que las masas perciben concretamente que el Gobierno Popular soluciona sus problemas más angustiosos comprometen su respaldo a la Unidad Popular y son capaces de vincular sus reivindicaciones inmediatas al problema de la lucha por el poder.

El apoyo creciente que tiene el Gobierno se debe en gran parte al efecto de las medidas redistributivas realizadas en estos meses. Mantener el efecto de estas medidas y ampliar los beneficios que es posible otorgar a vastos sectores populares sigue siendo un objetivo fundamental. Esto será posible en la medida que se logre controlar la inflación.

#### Precios y política antiinflacionaria

Los efectos de la política de redistribución del ingreso operada con los reajustes de remuneraciones a principios de 1971, se harían sal y agua si no se logra contener la inflación en límites aceptables. El control de los precios hoy día está íntimamente ligado al aumento sustantivo de la producción y de la

productividad, especialmente de aquellos productos que componen la demanda de los sectores populares.

Hay además una serie de medidas que tienen un impacto directo en la política de precios y que contribuyen a contener la inflación:

—Evitar los reajustes excesivos de remuneraciones, especialmente en aquellos sectores de trabajadores cuyos niveles salariales dan la pauta de los reajustes de toda una rama o sector de la producción. Esta política sólo es factible sobre la base de un activo trabajo político en las organizaciones sindicales más poderosas e influyentes.

—Desarrollar urgentemente una política de abastecimientos que aborde los "cuellos de botella" que se están produciendo actualmente y que sea capaz de prever los que puedan producirse el próximo año, con el objeto de orientar los créditos y estímulos que puedan ayudar a resolver los problemas de abastecimiento en corto tiempo, sin excluir las importaciones necesarias.

—Impedir el desarrollo de expectativas inflacionarias y alcistas, cuestión que se logró con bastante éxito hasta abril, pero en la que actualmente se está perdiendo terreno. En este sentido, la incorporación de la población en el control de precios y de calidades es una palanca de extraordinaria importancia.

La disminución de la cesantía

El problema de la cesantía parece haber pasado su momento más agudo. Sin embargo debe constituir una preocupación permanente en todo este período.

En la medida que se ha producido una reactivación industrial y comercial hay sectores que tienen capacidad de absorber mayor cantidad de mano de obra.

La solución de los problemas políticos y administrativos que se han creado en el área de la vivienda sigue siendo una de las medidas más importantes que el Gobierno debe tomar en relación a la necesidad de generar empleos.

El mejoramiento de los servicios básicos

Es en este campo donde es posible ampliar las medidas redistributivas. En la redistribución monetaria y el control de precios el objetivo es no retroceder. En cambio, es posible avanzar significativamente en el mejoramiento de los servicios que afectan a la mayoría de la población.

Tres son las áreas de trabajo prioritarias en este sentido: el desarrollo de los programas de salud, de educación y la política de servicios y de apoyo a las organizaciones vecinales, que será posible coordinar y realizar eficazmente desde el Ministerio de la Familia.

Fortalecer las organizaciones de masas

Este es otro aspecto de las medidas democráticas donde es posible ganar terreno. Las iniciativas más decisivas son la legalización de la Central Única de Trabajadores y la Reforma del Código del Trabajo.

El proyecto sobre Centros de Madres y talleres laborales debe también impulsarse.

Deben estudiarse también iniciativas legales que estimulen las organizaciones de clase de los medianos y pequeños industriales y de los pequeños propietarios agrícolas.

Política UP respecto de la DC

Hemos dicho después de abril, que las posibilidades de crecimiento de los sectores progresistas en el interior de la Democracia Cristiana han aumentado. El curso que tome la lucha interna allí depende fundamentalmente de la política que sigan sus distintos sectores, pero no cabe duda que la UP puede influir en una medida importante en su desarrollo. Para hacerlo la UP debe aclarar qué alternativa es más conveniente para el pueblo.

Una dirección progresista en el PDC es capaz de acentuar sus definiciones ideológicas reformistas (socialismo comunitario) y de aplicar una política de entendimiento con el Gobierno Popular sobre cuestiones en que hay coincidencias con la línea programática que sostuvo Tomic (nacionalización del cobre y de la banca, expropiación de los monopolios, reforma agraria).

En este sentido valoramos decididamente los acuerdos adoptados por la Juventud Demócrata Cristiana en su último Consejo Ampliado, realizado en abril, respecto de la política del consenso mínimo, proponiendo a su partido una operación política mediante la cual se propiciaría, en conjunto con la Unidad Popular, todos los proyectos de ley sobre los cuales haya coincidencias objetivas. Cabe sí preguntarse, si esta decisión responde a una política del PDC en su conjunto, o no pasa de mostrar los buenos deseos de los jóvenes democratacristianos.

Las definiciones de este tipo no resuelven las contradicciones fundamentales que existen en la Democracia Cristiana, pero sí contribuyen a aislar a sus sectores reaccionarios, tomándolos cada vez más minoritarios y relegándolos, por tanto, a segundo plano.

La otra alternativa es una ruptura que signifique la salida de la "izquierda cristiana" y la consolidación de la dirección de Frei sobre el Partido Demócrata Cristiano.

En esta etapa resulta evidente que el primer camino es el que más conviene para el desarrollo del proceso revolucionario y para la consolidación y avance de la Unidad Popular. Permite acrecentar el apoyo a las grandes medidas del programa, impide, por ahora, la reunificación de la derecha y abre la posibilidad para un trabajo sistemático en la base con los sectores populares de la Democracia Cristiana tras los objetivos que la Unidad Popular ha fijado y que el Gobierno está llevando a cabo.

Estas consideraciones deben orientar el tratamiento político a la Democracia Cristiana, abriendo cauce al entendimiento sobre cuestiones concretas con los sectores progresistas del PDC hoy día y aislando las posiciones de la derecha freísta. La UP no paga "precio" por esta política, por la sencilla razón de que el entendimiento se realiza en torno a aquellas cuestiones que la propia Unidad Popular y el Gobierno está interesado en realizar.

Creemos necesario precisar con claridad nuestra posición respecto de las reiteradas acusaciones que sobre la existencia de sectarismo en la base y dirección de la Unidad Popular hace la Democracia Cristiana. No cabe duda que tanto por la conducta política de ese partido en el pasado como por las actitudes francamente reaccionarias y anti-populares de la derecha freísta hoy, existe cierta tendencia en la base del pueblo a rechazar los acuerdos posibles y no aceptar la colaboración que ahora en algunos casos concretos puede producirse. Pero tampoco debe caber duda de que en la

medida que allí se impongan los sectores progresistas, y éstos traduzcan sus postulados en acciones concretas, se crearán las condiciones necesarias para un entendimiento también en la base.

Llamamos, por último, la atención en torno a algunas opiniones vertidas por el senador Irureta en el sentido de que "ni el Gobierno ni nosotros hemos conversado acerca de la posibilidad de pactos o posibles ingresos; volveremos al Gobierno sólo cuando el pueblo lo desee y lo diga en las urnas, no antes".

¡No sabemos que nadie los haya invitado! En todo caso está claro para nosotros, para el pueblo, la Unidad Popular y su Gobierno, que lo que Irureta plantea no es ni será posible, mientras ese partido siga siendo el que hoy día conocemos.

Compañeros, nuestra Comisión Política termina destacando la importancia decisiva de los hechos que centralmente caracterizan a la hora presente:

Una Unidad Popular que, por encima de discrepancias legítimas, marcha unida y decididamente en la aplicación del Programa, abriendo un camino definitivo hacia una patria sin explotación, la patria socialista, una patria en que el hombre sea solidario, productivo y creador.

Un partido, el MAPU, que nacido en medio de la lucha de clases de nuestro tiempo y producto de ella aporta al pueblo, su frente y su Gobierno, la decisión irrenunciable de luchar en cada fábrica, en cada población, en cada fundo o aldea...por la unidad proletaria, por la unidad de obreros y campesinos, por la unidad de todo el pueblo,... y de contribuir así

¡A convertir la victoria en poder y el poder en construcción socialista!